



Se consulta si resulta conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, la comunicación al Consulado británico de los datos de un ciudadano de esa nacionalidad obrantes en el Padrón municipal de habitantes de la población consultante.

Esta Agencia ha señalado en informe de 4 de abril de 2011 unos criterios sobre la actuación a seguir en caso de que se solicite la transmisión de datos referidos a ciudadanos extranjeros que se encuentran en España por las Embajadas o Consulados de los Estados de los que dichos ciudadanos son nacionales.

Dicho informe recuerda, en primer término, que la transmisión de los datos de un ciudadano extranjero a la representación diplomática de la que aquél es nacional implica una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como *“toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”*.

A su vez, en determinados supuestos dicha comunicación de datos implicará igualmente una transferencia internacional de los mismos. A tal efecto, debe tenerse en cuenta la definición establecida para las transferencias internacionales de datos por el artículo 5.1 s) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que considera como transferencia el *“tratamiento de datos que supone una transmisión de los mismos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo, bien constituya una cesión o comunicación de datos, bien tenga por objeto la realización de un tratamiento de datos por cuenta del responsable del fichero establecido en territorio español”*.

Teniendo en cuenta lo que se ha venido indicando, para que la transmisión de los datos a las Embajadas y Consulados solicitantes pueda considerarse conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 será preciso que dicha revelación de datos sea conforme tanto con las normas reguladoras de la cesión de datos como, en caso de implicar una transferencia internacional de datos, lo que no ocurre en el presente caso en que la comunicación se efectuaría a un país miembro de la Unión Europea, con las que establecen el régimen de las mismas.

En lo que a las normas reguladoras de la cesión de datos se refiere es preciso estar a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley Orgánica 15/1999, donde se establece que la misma solo puede verificarse para el cumplimiento de fines

directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y cesionario y exige para que pueda tener lugar, el consentimiento del interesado (artículo 11.1), otorgado con carácter previo a la cesión y suficientemente informado de la finalidad a que se destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquél a quien se pretenden comunicar (artículo 11.3), y que debe recabar el cedente como responsable del fichero que contiene los datos que se pretenden ceder.

No obstante, el número segundo del mismo artículo 11 establece determinadas excepciones a la necesidad de consentimiento del interesado, de las cuales interesa únicamente aquí la prevista en su letra a) que permite la cesión no consentida *“Cuando la cesión está autorizada en una Ley.”*

Plantea la consulta, si el Consulado solicitante de los datos ostenta la condición de Administración Pública, tal y como el mismo señala, a efectos de aplicación de lo previsto en el artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, cuyo apartado tercero recoge los principios que rigen la transmisión y utilización de los datos del Padrón Municipal, al disponer que *“Los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo al afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y en las leyes de estadística de las comunidades autónomas con competencia en la materia.”*

Para determinar que interpretación debe darse a la referencia a las Administraciones Públicas efectuada por el artículo 16.3 de la Ley 7/1985, debe acudirse a la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo común, cuyo objeto es establecer y regular las bases del régimen jurídico, el procedimiento administrativo común y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española. Dicha norma, aunque no ofrece un concepto de Administración Pública, señala los elementos que la integran al establecer en su artículo 2 que *“1. Se entiende a los efectos de esta Ley por Administraciones Públicas:*

*A) La Administración General del Estado.*

*B) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.*

*C) Las Entidades que integran la Administración Local.*

*2. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán asimismo la consideración de Administración Pública. Estas Entidades*

*sujetarán su actividad a la presente Ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación.”*

De la misma manera, la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dispone en su artículo primero que “1. Se entenderá a estos efectos por Administraciones públicas:

- a. La Administración General del Estado.*
- b. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.*
- c. Las Entidades que integran la Administración local.*
- d. Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales.”*

En consecuencia, la referencia a las Administraciones Públicas que realiza el artículo 16.3 de la 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local solamente puede ser entendida como referencia a las Administraciones Públicas españolas, de las que no formará parte en ningún caso la representación diplomática de un estado extranjero, por lo que la cesión de datos a que la consulta se refiere no puede venir amparada en lo previsto en el citado precepto, como esta Agencia ha venido señalando reiteradamente en sus informes.

Por otra parte, debe tomarse en consideración que la habilitación legal para la cesión de datos a la que se refiere el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999 no impone que la misma aparezca expresamente regulada por la norma habilitante, sino que dicha habilitación debe interpretarse en el sentido dado a la misma por el artículo 10.2 a) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, que considera que no será necesario el consentimiento del interesado para el tratamiento o la cesión de sus datos personales cuando “*lo autorice una norma con rango de Ley o una norma de derecho comunitario y, en particular, cuando concorra uno de los supuestos siguientes:*

*El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dichas normas, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de los interesados previstos en el [artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre](#).*

*El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el responsable del tratamiento cumpla un deber que le imponga una de dichas normas.”*

De este modo, la cesión sería posible en el caso de que exista un convenio o tratado internacional ratificado por España, que como señala el

artículo 96 de la Constitución española formará parte del derecho interno una vez publicado oficialmente en España, o una norma de derecho comunitario que habiliten dicha comunicación de datos.

Ello requiere que el solicitante de los datos especifique la concreta finalidad que justifica su comunicación a fin de examinar si la cesión de datos se encuentra facultada por alguna de las normas mencionadas en el párrafo anterior. En el presente supuesto, a pesar de los escasos datos aportados por el solicitante, de la consulta parece desprenderse que se pretende la investigación de un posible fraude de prestaciones de Seguridad Social concedidas por el país peticionario de los datos.

A este respecto cabe señalar que el Reglamento (CE) No 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social regula en su artículo 84 la recaudación de cotizaciones y devolución de prestaciones disponiendo lo siguiente: *“1. La recaudación de las cotizaciones debidas a una institución de cualquier Estado miembro así como la restitución de prestaciones indebidamente otorgadas por la institución de un Estado miembro podrán ser practicadas en otro Estado miembro, con arreglo a los procedimientos y con las garantías y privilegios aplicables a la recaudación de las cotizaciones debidas así como a la restitución de prestaciones otorgadas indebidamente por la institución correspondiente del segundo Estado miembro.”*

Por su parte, el Reglamento (CE) No 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 16 de septiembre de 2009 por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, concreta lo previsto en dicho precepto regulando en el capítulo III de su título IV la restitución de prestaciones otorgadas indebidamente, la recuperación de pagos y cotizaciones provisionales y la compensación y asistencia en materia de cobro, previendo en el número primero de su artículo 76 que *“A petición de la entidad requirente, la entidad requerida facilitará toda información que pueda resultar útil a la entidad requirente para el cobro de un crédito.”*

A estos efectos, según señala el artículo 75 de ésta última norma, se entiende por crédito *“cualquier crédito en relación con las cotizaciones o prestaciones pagadas o abonadas indebidamente, incluidos los intereses, multas, sanciones administrativas y cualesquiera otras cargas y gastos relacionados con el crédito de acuerdo con la legislación del Estado miembro que reclame el crédito en cuestión”* y por *“entidad requirente”* respecto de cada Estado miembro, cualquier institución que solicite información, notificación o cobros en relación con una reclamación según la definición anterior, mientras que *“entidad requerida”* será , respecto de cada Estado miembro, cualquier institución a la que pueda solicitarse información, notificación o cobros.



Por consiguiente, en lo que al presente supuesto respecta, la comunicación de la información solicitada, basada en una norma comunitaria, los Reglamentos del Parlamento y del Consejo a que se ha hecho referencia, resultaría conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999.